

como en el de Marisa Revilla se realiza una conexión fundamental entre movimiento social y procesos de constitución de una identidad colectiva y de producción de sentido. En este último artículo, «El concepto de movimiento social: acción, identidad y sentido», se analizan comparativamente los conceptos de comportamiento colectivo, acción colectiva y movimiento social, estableciendo, a través de la definición del fenómeno que ocupa el movimiento social, su espacio como forma concreta de acción colectiva.

M. R.

La teoría de la movilización de recursos y el estudio de los movimientos sociales

J. Craig Jenkins

RESUMEN

La teoría de la movilización de recursos ha presentado recientemente una interpretación alternativa de los movimientos sociales. Este trabajo analiza el surgimiento de esta nueva perspectiva y las controversias que recientemente ha suscitado. Este artículo propone un modelo multifactorial de la formación de los movimientos sociales, en el que se subraya la importancia de factores como los recursos, la organización y las oportunidades políticas, además de las hipótesis tradicionales del descontento. La teoría de la movilización por empresarios políticos (*entrepreneurial mobilization*) de McCarthy y Zald (1973) es críticamente valorada como interpretación de los movimientos sociales de los años sesenta y setenta, y se presta especial atención a la relevancia de la teoría de la acción colectiva de Olson (1968). El postu-

«Resource Mobilization Theory and the Study of Social Movements», *Annual Review of Sociology*, 9, 1983, pp. 527-553. Traducción de Ricardo Llamas.

Este artículo ha sido elaborado con el apoyo financiero de National Endowment for the Humanities (beca RS-00119-79). El autor se ha beneficiado de los comentarios de Ron Lawson, que no es, claro está, responsable de su contenido.

lado básico de este artículo es que la organización del grupo es el principal factor determinante del potencial de movilización y de sus pautas. El debate entre Gerlach y Hine (1970) y las teorías empresariales (*entrepreneurial theories*) de la organización de los movimientos sociales son analizados en el contexto de los cambios históricos acaecidos en el ámbito de los movimientos sociales y de la persistencia de la diversidad en la organización. Se esboza además un modelo político de los movimientos sociales, a partir de la teoría de la estrategia de Gamson (1975) y de la teoría de la comunidad política (*polity theory*) de Tilly (1978), modelo que toma en consideración la incidencia especial que tienen las alianzas y los procesos políticos como determinantes del éxito o fracaso. Piven y Cloward (1977) están en lo cierto cuando afirman que la presencia de conflictos determina el éxito, y que tales conflictos pueden ser movilizados aun en ausencia de organización formal, pero sin embargo se equivocan al afirmar que la organización formal es necesariamente incompatible con la movilización. El desarrollo futuro de la teoría de la movilización de recursos ha de establecerse a partir de dos caminos: la extensión de la teoría de la comunidad política y su aplicación a diferentes Estados y regímenes, teniendo en cuenta el desarrollo del neocorporatismo, y el desarrollo de una psicología social de la movilización más sofisticada.

LA EMERGENCIA DE LA TEORÍA DE LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

De la amplia gama de efectos que tuvieron los movimientos sociales de los años sesenta en la sociología, uno de los más significativos fue la reorientación que se produjo en el estudio de dichos movimientos sociales. El problema central había sido tradicionalmente la explicación de la participación individual en los movimientos sociales. Las principales formulaciones —la teoría de las sociedades de masas, de la privación relativa o del comportamiento colectivo— apuntaban hacia un incremento repentino de los agravios, ocasionado por determinadas «tensiones sociales» fruto de un cambio social rápido. Si bien las hipótesis específicas variaban, estas teorías tradicionales tenían en común la asunción de que la participación en los movimientos era relativamente poco frecuente, el descontento era transitorio, las ac-

tuciones del movimiento y las respuestas de origen institucional podían distinguirse claramente, y los actores de los movimientos eran arracionales, cuando no absolutamente irracionales. Los movimientos sociales de los años sesenta desafiaron dramáticamente estas asunciones. El hecho de que tales movimientos proporcionaran una rica colección de experiencias y que contaran con la simpatía explícita de un amplio grupo de analistas, fueron estímulos importantes en la subsiguiente reorientación de los presupuestos teóricos y de los factores analíticos privilegiados, formalizados en última instancia en la teoría de la movilización de recursos de los movimientos sociales (Oberschall, 1973; Tilly, 1978; McCarthy y Zald, 1973, 1977; Gamson, 1975; Jenkins, 1981). En ocasiones, estos presupuestos se acercaron a formulaciones neomarxistas (Useem, 1975; Paige, 1975; Schwartz, 1976; Ash-Garner, 1977; Piven y Cloward, 1977). Estas nuevas perspectivas ponían un especial énfasis en las continuidades entre el movimiento y las actuaciones institucionales, en la racionalidad de los actores de los movimientos, en los problemas estratégicos que afrontaban y en el papel de los movimientos como agentes de cambio social. Más concretamente, estos analistas argumentaban que:

- a. las actuaciones de los movimientos son respuestas racionales de adaptación a los costos y beneficios de diversas líneas de acción;
- b. los objetivos básicos de los movimientos se definen por conflictos de intereses que se construyen como relaciones de poder institucionalizadas;
- c. los agravios que dichos conflictos generan son suficientemente ubicuos como para que la formación y la movilización dependa de cambios en los recursos, en la organización del grupo y en las oportunidades para la acción colectiva;
- d. la organización formalmente estructurada y centralizada de los movimientos es más típica de los movimientos sociales modernos, y resulta más eficaz que las estructuras descentralizadas e informales de cara a la movilización de recursos y al incremento continuado de los desafíos;
- e. el éxito de los movimientos está determinado de forma importante por factores estratégicos y por los procesos políticos en los que éstos tienen lugar.

Estas nuevas perspectivas, a su vez, han estimulado una serie de críticas que van desde los debates entre los teóricos de la movilización de recursos en torno a la utilidad de algunas formulaciones particulares (Perrow, 1979) hasta los argumentos propuestos por parte de teóricos del comportamiento colectivo en el sentido de que las nuevas perspectivas o bien no son tan distintas como afirman quienes las proponen, o bien se apoyan en un marco teórico demasiado estrecho (Turner, 1982; Gusfield, 1982; Zurcher y Snow, 1981). Este artículo presta atención a estos debates, así como a los recientes estudios empíricos, de forma que sea posible esquematizar los argumentos básicos de la teoría de la movilización de recursos y revisar críticamente sus contribuciones a las cuestiones más relevantes en este ámbito: la formación de los movimientos, los procesos de movilización, la organización de los movimientos sociales y el resultado de los desafíos que plantean.

FUENTES DE CONTROVERSIAS. MOVILIZACIÓN DE RECURSOS *VERSUS*
 APROXIMACIONES TRADICIONALES

El conflicto entre la teoría de la movilización de recursos y las aproximaciones tradicionales, en especial las teorías del comportamiento colectivo, es en buena medida producto de diferentes concepciones de los movimientos sociales. Las definiciones tradicionales incluyen cualquier conjunto de actuaciones colectivas no institucionalizadas dirigidas conscientemente hacia el cambio social (o en oposición a éste) y que cuenta con un mínimo de organización (Wilkinson, 1971:27; Turner y Killian, 1972:246). Tradicionalmente se ve a los movimientos sociales como el desarrollo de formas elementales de comportamiento colectivo susceptibles de integrar tanto movimientos de cambio personal (sectas religiosas, cultos o comunas) como aquellos que apuntan a cambios de orden institucional (reformas legales o cambios en el poder político). Los teóricos de la movilización de recursos, por su parte, consideran los movimientos sociales como una prolongación de actuaciones institucionalizadas y han restringido su campo de análisis a los movimientos que postulan un cambio institucional que pretenda alterar «elementos de la estructura social y/o la estructura de la distribución de las recompensas en

la sociedad» (McCarthy y Zald, 1977:1218), que aspiran a organizar grupos que actúan en contra de las elites institucionales y que estaban previamente desorganizados (Gamson, 1975:16-18), o que dicen representar intereses de los grupos excluidos del ámbito de la comunidad política (Jenkins y Perrow, 1977; Tilly, 1978, 1979).

La mayor parte de las controversias se deriva de esta diferencia. Los movimientos de cambio institucional tienden a ser conformes con el modelo básico de la movilización de recursos: las acciones racionales se orientan hacia objetivos fijos, claramente definidos a través de un control centralizado por parte de la organización, y que pueden ser evaluados en términos de logros tangibles. La premisa que establece que los movimientos sociales son una extensión de las actuaciones institucionales es también plausible. No obstante, el problema surge al aplicar este modelo a los movimientos de cambio personal en los que las acciones expresivas están estrechamente relacionadas con acciones de tipo racional-instrumental. En tales movimientos los objetivos tienden a surgir de la interacción; el control centralizado aparece ligado a un líder carismático o bien es débil, y los resultados son difusos. En este último caso, las continuidades entre los movimientos y las formas de comportamiento colectivo elemental son más aparentes.

Teniendo en cuenta esta bifurcación, ¿cómo puede desarrollarse este campo de estudios? Una dirección posible es la aplicación de los modelos de movilización de recursos a los aspectos organizativos de los movimientos de cambio personal. El trabajo reciente de Lofland (1977, 1979), Liebman (1983), y de Hadden y Swan (1981) sobre las organizaciones de los movimientos religiosos, y los de Snow, Zurcher y Eckland-Olson (1980) sobre las microestructuras de captación, ya han demostrado la utilidad de los modelos de movilización de recursos en el estudio de los movimientos de cambio personal. Más problemático es el análisis del cambio personal y cultural en términos de movilización de recursos. Tradicionalmente, la teoría de la movilización de recursos ha sido planteada a partir de actores colectivos que luchan por el poder en un determinado contexto institucional. Los procesos a pequeña escala han sido ignorados, o bien son considerados a partir de asunciones simplificadas que se aplican a los análisis a gran escala (por ejemplo, la premisa

del actor racional; cf. Tilly, 1978:119). Gamson, Fireman y Rytina (1982) han establecido un punto de partida posible al analizar la micromovilización como una acción que da lugar a la rebelión, mientras que Granovetter (1978) ha analizado la lógica del proceso colectivo de toma de decisiones. Sin embargo, estos análisis no han sido todavía aplicados a la transformación de la personalidad o al cambio cultural. A la vista del limitado éxito alcanzado por los sociólogos en el tratamiento de las relaciones que pueden establecerse entre micro y macroprocesos (Collins, 1981), es de prever que éste siga constituyendo un problema en el futuro.

LA FORMACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Un elemento *sine qua non* presente en todos los estudios de los movimientos sociales ha sido tradicionalmente el problema del porqué de su formación. Las explicaciones tradicionales ponen el énfasis en incrementos repentinos de los agravios a corto plazo, motivados por tensiones estructurales propias de un rápido cambio social (Gusfield, 1968). Por el contrario, los teóricos de la movilización de recursos argumentan que los agravios son un factor secundario. Tilly (1978), Jenkins y Perrow (1977) y Oberschall (1978a) mantienen que los agravios son relativamente constantes, que derivan de conflictos de intereses de orden estructural articulados en las instituciones sociales, y que los movimientos surgen a partir de cambios a largo plazo en los recursos del grupo, en su organización y en las oportunidades de desarrollar formas de acción colectiva. Si bien los agravios son necesarios de cara a la formación de un movimiento, éstos se explican, bien a través de cambios en las relaciones de poder (Korpi, 1974), bien a través de conflictos de interés estructurales. McCarthy y Zald (1973, 1977) toman una dirección ligeramente diferente al argumentar una teoría empresarial de la formación de los movimientos en la que el factor principal es la accesibilidad de los recursos, especialmente de cuadros y de facilidades de organización. Los agravios son, bien un *a priori* estructural, bien (como es cada vez más frecuente en el contexto actual) una elaboración de los esfuerzos movilizados desarrollados por los empresarios políticos del movimiento. Como dicen McCarthy y Zald, «la definición de

los agravios se ampliará hasta abarcar cuestiones como la financiación disponible y el personal de apoyo existente» (1973:13).

El debate a que dan lugar estas formulaciones, en especial los postulados de McCarthy y Zald, ha generado apoyos para ambas, así como una refinada teoría de los agravios. El apoyo más consistente a la teoría de McCarthy y Zald ha surgido de los estudios de los movimientos de «interés público», que alcanzaron cierta preeminencia durante los años setenta. El análisis de Berry (1977:17-27) sobre las organizaciones de interés público vino a decir que la mayoría de éstos surgía de empresarios políticos enérgicos que actuaban sin necesidad de incrementos significativos en los agravios. Del mismo modo, Schoefield, Meier y Griffin (1979), Simcock (1979) y Wood (1982) han seguido el surgimiento de los movimientos ecologistas hasta llegar a un puñado de científicos y de investigadores de las políticas del medio ambiente que redefinían las tradicionales preocupaciones conservacionistas en términos ecológicos y que movilizaban recursos institucionales. Tales movimientos perseguían objetivos ligados a intereses de colectividades amplias, desorganizadas y difusas, como el público en general o los consumidores de clase media, los cuales no parecían susceptibles de movilizarse sin la iniciativa de tales empresarios políticos.

El modelo empresarial ha recibido también el apoyo de los estudios sobre grupos desfavorecidos, como granjeros y agricultores (Jenkins y Perrow, 1977) y receptores de ayudas sociales (Bailis, 1974; Jackson y Johnson, 1974). En estos casos, los empresarios políticos se habían dispersado después de haber sido cuadros en los movimientos estudiantil y de derechos civiles. Ambos se centraban también en torno a grupos desfavorecidos y con pocos recursos, experiencia política mínima, y escasa organización previa, otorgando a los organizadores externos una importancia crítica en la formación del movimiento. De hecho, esta diversificación de los cuadros tuvo también una importancia decisiva en la gestación de una amplia gama de movimientos entre otros grupos comparativamente menos desfavorecidos como el de liberación de la mujer (Freeman, 1973; Evans, 1979; Tierney, 1982), el de la ecología radical (Wood, 1982) y el movimiento vecinal y de organización ciudadana en general (Kotz y Kotz, 1977; Boyte, 1979). En otras palabras, el modelo empresarial parece particularmente relevante en lo que se refiere a la explica-

ción de los movimientos de grupos desfavorecidos y de colectividades amplias y desorganizadas. Los empresarios políticos surgen a menudo a partir del desarrollo de facciones en el seno de movimientos previamente existentes. No obstante, de manera significativa, los movimientos más importantes no parecen emerger de una nueva elaboración de los agravios por parte de los empresarios políticos. Como dicen McCarthy y Zald (1973:28), éstos tienen más éxito cuando actúan en el seno de los principales conflictos de interés, redefiniendo los agravios más antiguos en nuevos términos.

Estudios recientes han demostrado asimismo la importancia de los agravios generados por amenazas importantes y repentinas a los intereses de grupos cohesionados y con un nivel de recursos moderado. El estudio de Useem (1980) sobre el movimiento de oposición a las posturas contrarias a la integración racial en las escuelas de Boston descubrió que la privación relativa generada por el desafío elitista a los privilegios tradicionales era significativa de cara a la explicación de la participación al margen de los niveles de solidaridad. Si las medidas que generaban los agravios eran *post factum*, el estudio de Walsh (1981) sobre los grupos de protesta contrarios a la reapertura de la central nuclear de Three Mile Island ha confirmado la importancia de las crisis generadas por la actuación de las elites. Las organizaciones antinucleares no habían logrado movilizar a los ciudadanos en contra de la central hasta el desastre. De modo significativo, el apoyo vino abrumadoramente de los residentes de clase media y media alta que eran políticamente activos y que estaban ampliamente involucrados en otras organizaciones comunitarias no locales. En otras palabras, la elaboración de la «crisis» presupone la existencia de grupos organizados con recursos. La «crisis» es en general producto de acciones de la elite que amenazan la forma de vida de una población y que de este modo violan las concepciones institucionalizadas sobre las responsabilidades de las elites (Moore, 1978). Las investigaciones confirman también la hipótesis según la cual los cambios a largo plazo en la organización, los recursos y las oportunidades de los grupos dan lugar a la formación de movimientos. Los conflictos industriales son más susceptibles de afectar a trabajadores ecológicamente concentrados en grandes fábricas y en barrios de ciudades densamente pobladas (Lodhi y Tilly, 1973; Shorter y Tilly,

1974:287-295; Foster, 1974; Lincoln, 1978). Del mismo modo, el surgimiento del movimiento de los derechos civiles en los años cincuenta partió de la urbanización de la población negra del Sur, de su incorporación a las clases media y obrera, del aumento progresivo en la matriculación de negros y negras en las universidades, y de la mayor organización de las iglesias negras. Tales cambios liberaron a la población negra de las formas tradicionales de control social de tipo paternalista, aumentaron el nivel de organización y recursos de la población negra, y colocaron al votante negro en una posición estratégica en el seno de la política nacional (W. J. Wilson, 1973:140-151; Piven y Cloward, 1977:189-194; Morris, 1980; McAdam, 1982). De modo similar, Ragin (1979) y Nielsen (1980) argumentan que los movimientos étnicos separatistas en Europa occidental han surgido a causa de las desigualdades que origina un *status* en declive, en especial a partir del incremento en los recursos y la concentración ecológica de grupos minoritarios, que facilitan su competencia por las ventajas sociales. De este modo, un repentino incremento en las oportunidades con que cuentan los grupos agraviados y cohesionados puede llevar a la formación de movimientos. Las rebeliones emblemáticas del campesinado a gran escala surgen tras el colapso de la capacidad coercitiva del Estado, dejando a comunidades largamente cohesionadas en libertad para actuar en función de viejos agravios (Skocpol, 1979). En general, la formación de los movimientos está ligada a la mejora del estatus de los grupos agraviados, no tanto por el hecho de que tales agravios sean creados por la «revolución de las expectativas crecientes», sino sobre todo porque estos cambios reducen los costos de la movilización y mejoran sus posibilidades de éxito.

Estos estudios indican también la necesidad de una aproximación multifactorial al problema de la formación de los movimientos. Varios son los caminos que llevan a la formación de los movimientos, según cuáles sean los elementos ausentes en la situación previa. Gamson, Fireman y Rytina (1982:82-93) proponen una formulación sugestiva: el modelo del umbral de recursos (*the «threshold» model of resources*). Una vez superado este umbral, las aportaciones de recursos adicionales dejan de suponer una diferencia significativa. Presumiblemente, lo mismo podría decirse de los agravios, de la organización y de las oportunidades. Cada factor debe estar presente por encima de su umbral

antes de que surja el movimiento. Al mismo tiempo, la existencia de déficit en algunos elementos (por ejemplo, en la organización del grupo) pueden ser compensados con aportes extraordinarios de otros factores (por ejemplo, de experiencia de los organizadores). En general, una aproximación multifactorial resulta más útil que el énfasis exclusivo que McCarthy y Zald otorgan a los recursos de organización. Del mismo modo, las teorías clásicas de los agravios a partir de las tensiones estructurales han resultado menos útiles que las aproximaciones que inciden especialmente en los conflictos estructurales de intereses.

EL PROCESO DE MOVILIZACIÓN

La movilización es el proceso mediante el cual un grupo se asegura el control colectivo sobre los recursos necesarios para la acción colectiva. Las cuestiones principales que se plantean son, según esto, el control de los recursos previo a los esfuerzos de movilización por parte del grupo; el proceso mediante el cual el grupo selecciona los recursos y los dirige hacia el objetivo de cambio social, y el nivel de contribución por parte de las personas ajenas al grupo en lo referente al incremento del abanico de recursos disponible.

Existe un escaso acuerdo sobre los tipos de recursos que resultan más significativos. Algunos autores han propuesto esquemas de clasificación basados en la utilidad de determinados recursos en el control de las acciones encaminadas hacia la realización de los objetivos (por ejemplo, Etzioni, 1968:388-389; Gamson, 1968:100-105). En esta línea, Rogers (1974) diferencia los recursos *instrumentales* utilizados en los intentos de influencia propiamente dichos de los *infrarecursos* que condicionan las formas de utilización de éstos. Del mismo modo, Jenkins (1982a) distingue entre los recursos de poder que proporcionan los medios de control de las acciones que se dirigen hacia la consecución de los objetivos y los recursos de *movilización* como pueden ser las facilidades que proporcionan de cara a la movilización de los recursos de poder.

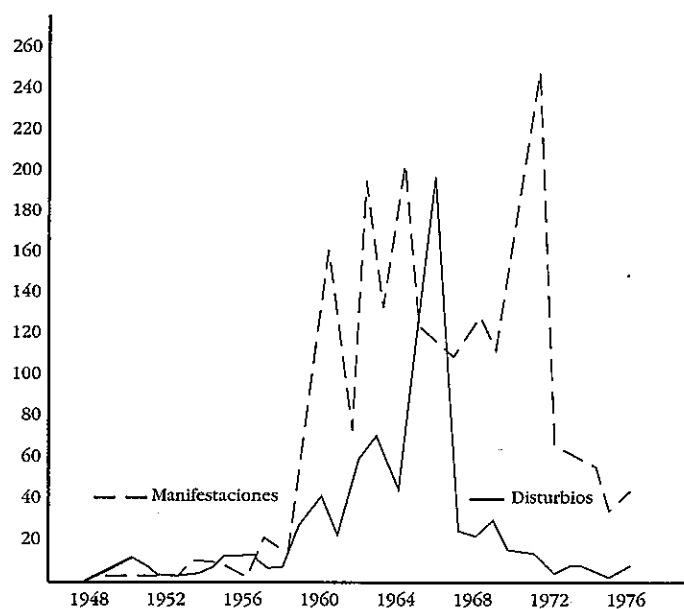
El problema de los esquemas que se basan en la utilización de los recursos es, no obstante, el hecho de que la mayor parte de éstos tienen usos múltiples. Cualquier esquema que ignore las

características intrínsecas de los recursos tiene por ello una validez limitada. En respuesta a estos argumentos, la mayoría de los analistas enumeran simplemente las ventajas que son movilizadas con más frecuencia por parte de los movimientos (por ejemplo, dinero, locales, trabajo o legitimidad en el caso de McCarthy y Zald, 1977, o la tierra, el trabajo, el capital o los conocimientos técnicos en Tilly, 1978:69). Freeman (1979:172-175) ha propuesto un esquema más útil, en el que distingue las ventajas *tangibles*, como dinero, locales o sistemas de comunicación, de las ventajas *intangibles* o «humanas», que forman la base central de los movimientos. Las ventajas intangibles incluyen tanto recursos especializados como habilidades de organización o legales, así como el trabajo no especializado de quienes apoyan el movimiento.

La aportación más característica de la teoría de la movilización de recursos es el carácter significativo que atribuye a las contribuciones de personas ajenas y a la cooptación de recursos institucionales por parte de los movimientos sociales contemporáneos. Tradicionalmente, los analistas han asumido que los recursos provienen de los beneficiarios directos de los cambios sociales que persiguen, y que, habida cuenta que los movimientos se emplazan fuera de la política institucionalizada, sus recursos se derivan de fuentes no institucionales. McCarthy y Zald (1973, 1977) argumentan, no obstante, que los movimientos de los años sesenta y setenta implicaron a una «comunidad consciente» (*conscience constituency*) que formaba parte de la emergente y rica clase media (incluyendo a estudiantes universitarios) y que incorporó recursos de fundaciones privadas, instituciones de asistencia social, medios de comunicación de masas, universidades, agencias gubernamentales y corporaciones empresariales. Consecuentemente, los movimientos sociales han pasado de las concepciones clásicas de la organización de los movimientos sociales (las clásicas OMS) con liderazgo autóctono, personal voluntario, afiliación extensiva, recursos de los beneficiarios directos y acciones basadas en la participación masiva, a las organizaciones profesionales de los movimientos sociales (OMS profesionales) con liderazgo externo, personal remunerado a tiempo completo, afiliación reducida o inexistente, recursos de las comunidades conscientes y acciones que «hablan en nombre» del grupo agraviado sin requerir su participación.

Algunos elementos de este análisis de los recientes movimientos sociales han sido cuestionados. La tesis general afirma que tales movimientos no surgieron de una genuina «revolución en la participación» que hubiera tenido lugar en la política norteamericana, sino que simplemente daban cuenta de mayores facilidades para la movilización profesionalizada. Los estudiantes universitarios y los profesionales con horarios relajados y recursos económicos, las instituciones liberales con recursos «disponibles» y los medios de comunicación influyentes que podían ser cooptados por parte de los empresarios políticos de los movimientos, fueron los factores más significativos de los tormentosos años sesenta. Los datos de los estudios indican, sin embargo, una virtual explosión masiva de la participación política no convencional entre 1960 y 1974. El gráfico 1 muestra cómo el número de protestas y disturbios aumentó dramáticamente en el

GRÁFICO 1. MANIFESTACIONES Y DISTURBIOS EN LOS ESTADOS UNIDOS, 1948-1977 (SEGÚN TAYLOR Y JODICE, 1983)



período 1967-1972. Esta «revolución de la participación» se basó, a su vez, en un incremento general en la movilización política no convencional, a medida que el número de personas políticamente ideologizadas pasaba del 1 % de la ciudadanía en los años cincuenta hasta el 19 % en 1972, para descender después al 7 % en 1976 (Nie, Verba y Petrocik, 1980:367), la afiliación en las organizaciones políticas subía del 2,8 % en 1956 hasta un máximo nivel del 4,4 % en 1974 (Survey Research Center y Davis *et al.*, 1981), y los activistas y militantes comprometidos en actividades no electorales pasaban de un 5-12 % durante los años cincuenta a un 15-20 % a finales de los sesenta y principios de los setenta (Campbell *et al.*, 1960:51-52; Converse, 1972:332-336; Rosenau, 1974:44-86; Milbrath y Goel, 1977: 18-19). Paralelamente, la movilización por cuestiones rutinarias de política descendió; se produjo un declive lento de la participación electoral, aumentó la independencia con respecto a los partidos políticos, y la desconfianza general con respecto a los cargos electos y las principales instituciones se incrementó de manera continuada (Ladd y Hadley, 1978; Miller, Miller y Schneider, 1980:257-259).

Si bien McCarthy y Zald aciertan al señalar el incremento a lo largo de la década de los sesenta del número de OMS profesionales y de la cooptación por parte de éstas de recursos institucionales, estos elementos apenas logran explicar la movilización y el alboroto político generalizado de ese período. La mayor parte de esos movimientos no eran OMS profesionales y sus cruciales logros no dependieron de recursos externos. Las contribuciones de recursos externos fueron básicamente reactivas, no desencadenantes (*not initiatory*), y no consistentemente beneficiosas. El movimiento de los derechos civiles fue liderado de forma autóctona por el clero y los estudiantes negros, movilizó recursos fundamentalmente a través de redes comunitarias locales, y alcanzó a las «comunidades conscientes» sólo después de haberse iniciado el tumulto generalizado (Morris, 1980, 1981; McAdam, 1982). Además, la mayor parte de los recursos externos fue movilizada por el ala más moderada del movimiento, cuando ésta ya había entrado con éxito en el ámbito de la política y empezaba a institucionalizar los logros de las Actas de Derechos Civiles de 1964 y 1965. Irónicamente, el ala militante era más dependiente de los recursos externos y, en parte debido al conflicto sobre la utilización de tales recursos, se hizo progresivamente

más radical, volviéndose en un momento dado contra su «comunidad consciente» y destruyendo las organizaciones (Meier y Rudwick, 1973; Carson, 1981). Tampoco es completamente satisfactoria la teoría de McCarthy y Zald en lo que se refiere a la explicación de la participación de la clase media y de los estudiantes en los diversos movimientos de los años sesenta. Al centrarse exclusivamente en los cambios económicos que facilitaban la participación (ingresos y horarios discrecionales, formación laboral en el ámbito de las reformas sociales, disponibilidad institucional), esta teoría ignora los cambios en los valores culturales y las actuaciones de las elites, que motivaron un creciente interés en los enfoques políticos de los movimientos. La «revolución en la participación» de la clase media tiene sus raíces en el cambio hacia valores «posmaterialistas», que incidían especialmente en formas de autosatisfacción, las cuales fomentaban demandas de participación directa en la toma de decisiones políticas y en la definición de las inquietudes morales respecto a la situación desfavorecida de otros grupos (Ladd y Hadley, 1978; Yankelovich, 1974, 1981; Inglehart, 1977). Cuando las elites desafiaron estos valores a través de actos de manipulación y de un rechazo explícito, la clase media se agrupó en torno a los movimientos.

La teoría de McCarthy y Zald identifica, no obstante, aspectos significativos de los recientes movimientos sociales. Los movimientos de estudiantes y en contra de la guerra se apoyaban en buena medida en la movilización de equipos transitorios (*transitory teams*) a través de la cooptación de los medios de comunicación (Oberschall, 1978b; Gitlin, 1980). También el movimiento por los derechos al bienestar social (Bailis, 1974; West, 1981), el movimiento de granjeros (Jenkins y Perrow, 1977; Jenkins, 1984), y la primera oleada del movimiento de mujeres (Freeman, 1975) fueron iniciados por empresarios y empresarias políticas que dependían fuertemente de recursos institucionales. Además, los movimientos articulados a lo largo de los años setenta en torno al medio ambiente, los derechos de los consumidores y cuestiones de «interés general» encajan bastante en el modelo de las OMS profesionales (McFarland, 1976; Berry, 1977; Handler, 1978; Weisbrod, Handler y Komesar, 1978). Por último, algunas OMS profesionales como la Mobilization for Youth (Movilización por la Juventud) (Helfgot, 1981) y el Community

Action Program (Programa de Acción Comunitaria) (Peterson y Greenstone, 1977; Friedland, 1980) actuaron efectivamente como instrumentos de control social, «disolviendo las posibilidades radicales del desacuerdo [...] a través de la dedicación de grandes cantidades de recursos [...] con el objetivo de establecer mejoras» (McCarthy y Zald, 1973:26).

Si los beneficiarios directos han sido quienes más han contribuido a los recientes movimientos sociales, ¿cómo han sido movilizados? Habida cuenta los supuestos racionalistas de la teoría de la acción colectiva de Mancur Olson (1968), el debate principal se ha articulado en torno a la cuestión de la utilidad de su movilización. De acuerdo con Olson, los individuos racionales con intereses propios no contribuyen a la consecución de «bienes colectivos» (como pueden ser los beneficios no divisibles). La movilización sólo tiene lugar si se ofrecen «incentivos selectivos» (beneficios particulares y divisibles), si el grupo es suficientemente pequeño como para que los beneficios individuales sean mayores que el coste que implica asegurar un bien colectivo, o si estamos ante un grupo «privilegiado» (es decir, un grupo que contiene individuos suficientemente motivados como para que el coste marginal de la consecución del bien colectivo sea menor que el beneficio individual).

Las tres soluciones que propone Olson al problema de los bienes colectivos han sido fuertemente atacadas. El principal objetivo de estas críticas ha sido la teoría de la movilización por el «subproducto» (*byproduct*) basada en los incentivos selectivos. De acuerdo con esta teoría, los empresarios políticos del movimiento, motivados por los incentivos selectivos que suponen las oportunidades profesionales, ofrecen a su vez otros incentivos selectivos a los miembros por su contribución, creándose de este modo un ciclo expansivo de acciones colectivas y progresiva movilización (Salisbury, 1969; Frohlich, Oppenheimer y Young, 1971; Oberschall, 1973:146-172). El principal desafío teórico se ha concentrado en la importancia de los incentivos morales o expresivos (*purposive*). Tillock y Morrison (1979) establecieron que los miembros de una población de crecimiento cero manifestaban de forma abrumadora que su compromiso moral con el bien colectivo del control de la población era el único motivo de su apoyo. Además, tales contribuciones no dependían del número de miembros de cada sección del movimiento, lo que cues-

tionaba la hipótesis de los pequeños movimientos. Si bien las encuestas de opinión son un método débil de cara al establecimiento de los motivos, los estudios sobre las organizaciones de defensa del medio ambiente y de los intereses públicos realizados por Mitchell (1980) y Berry (1977:36-43) han proporcionado nuevos datos en contra de la teoría del «subproducto». Algunos incentivos selectivos, como los servicios a los miembros del grupo y los eventos sociales, se utilizan raramente, y en las encuestas quienes contribuyen con el movimiento afirman de manera consistente que tales incentivos son irrelevantes de cara a su apoyo. Un dato esclarecedor puede venir de la estructura de las apelaciones (*appeals*) a la contribución de los miembros. Los empresarios políticos de los movimientos han planteado de forma consistente sus llamadas a la movilización en términos de «males colectivos», como los extraordinarios peligros ecológicos y las violaciones de los derechos humanos. Las preocupaciones morales son evidentemente determinantes. Es más, en tales situaciones «sin salida» la distinción entre beneficios individuales y colectivos se borran (Hirschman, 1970). Sin embargo, estos estudios no refutan más que la versión fuerte de la hipótesis del polizón o *free rider*, es decir, que nadie contribuirá a la consecución de bienes colectivos en ausencia de incentivos selectivos (Brubaker, 1975). Por lo demás, tales análisis no examinan más que a los contribuyentes de los movimientos, ignorando el número muy superior de no contribuyentes que pueden también beneficiarse del bien colectivo.

Pero ¿qué pasa con la versión débil de la hipótesis del *free rider*, según la cual las contribuciones serán subóptimas en ausencia de incentivos selectivos? (Samuelson, 1954). En una serie de experimentos, Marwell y Ames (1979, 1980) han sometido esta versión a un minucioso examen, concluyendo que más de la mitad de los participantes contribuyen a la consecución del bien colectivo en ausencia de incentivos selectivos. Los cambios en los recursos personales, los niveles de amortización (*pay off*) y la experiencia previa no afectaban significativamente a los niveles de contribución. El tamaño del grupo era, no obstante, significativo, siendo los grupos menores los que contribuyen en mayor grado. Que ello se deba a una mayor facilidad de coordinación o al efecto señalado por Olson en los grupos pequeños es todavía una cuestión no resuelta. Si bien el isomorfismo entre los experi-

mentos y el escenario real no es nunca perfecto, tales estudios son suficientemente realistas como para cuestionar seriamente la hipótesis del *free rider*. De hecho, Marwell (1981) ha postulado un altruismo intrínseco reforzado por la interacción cara a cara.

No obstante, la teoría de Olson no puede ser ignorada. En su favor puede citarse el caso de la National Welfare Rights Organization (Organización Nacional del Derecho al Bienestar) (Bailis, 1974). La NWRO surgió de la iniciativa de un grupo de organizadores profesionales que utilizaron como incentivo selectivo la consecución de beneficios especiales en metálico para movilizar a los beneficiarios de la asistencia social. Cuando los organizadores pasaron a promover incentivos no materiales, pocos fueron los miembros potenciales que se mostraron receptivos. De acuerdo con los argumentos de Olson, tan pronto como los miembros aprendieron a procurarse los beneficios por sí mismos, las contribuciones con la NWRO decayeron, dejando tras de sí a un grupo de activistas motivados en buena medida por el beneficio selectivo del reconocimiento social. Cuando los administradores de la asistencia social abolieron el programa de beneficios en metálico, la NWRO quedó virtualmente colapsada.

La teoría de Olson identifica correctamente un problema importante, pero no logra ofrecer a éste una solución adecuada. Olson está en lo cierto al sostener que los movimientos no se activan en torno a beneficios materiales colectivos y que el problema del polizón o *free rider* es, potencialmente, importante. La evidencia más sólida en este sentido proviene del estudio de Walsh y Warland (1982) sobre los residentes próximos al desastre de la planta nuclear de Three Mile Island. La actitud típica de los polizones fue adoptada por un número considerable de las personas afectadas; sólo el 13 % de los que se oponían a la reapertura contribuyeron con el movimiento de oposición. Esta actitud se debía en buena medida a factores como la ignorancia y a cálculos sobre el interés personal. Casi la mitad (48 %) de éstos no estaban al corriente del esfuerzo de oposición o no habían sido contactados por los organizadores del movimiento. Los restantes adujeron impedimentos y razones personales (24 %), reservas hacia las tácticas de protesta o hacia los líderes del movimiento (11 %), o pesimismo sobre su posible eficacia política (5 %). En otras palabras, el comportamiento según el

esquema del polizón está probablemente muy extendido y, si bien los esfuerzos de las organizaciones pueden reducir su frecuencia, los cálculos personales sobre costes y beneficios son consideraciones significativas.

¿Cómo logran entonces superar el problema los movimientos que sí alcanzan cierto éxito? El método principal es el desarrollo de programas que ofrecen *incentivos colectivos* como la solidaridad del grupo y el compromiso con una causa moral (J. Wilson, 1973; Gamson y Fireman, 1979; Moe, 1980; Jenkins, 1982a).

La solidaridad del grupo y los incentivos expresivos son colectivos en tanto que entrañan la fusión de intereses personales y colectivos. Los contribuyentes de los movimientos, como cualquier actor socializado, se mueven tanto por valores y sentimientos interiorizados como por cálculos de interés personal. El principal objetivo de la movilización es entonces la generación de solidaridad y compromiso moral para con las amplias colectividades en nombre de las cuales se actúa.

El potencial de movilización está en buena medida determinado por el grado de organización de grupo preexistente. Los grupos que comparten identidades distintivas fuertes y redes interpersonales densas exclusivas de los miembros del grupo están altamente organizados y por ello pueden movilizarse rápidamente (Tilly, 1978:62-63). Al proveer solidaridades y compromisos morales prioritarios, estas identidades y redes constituyen una base a partir de la cual se puede operar con incentivos colectivos. La «captación en bloque» (*bloc recruitment*) (Oberschall, 1973:125) de grupos de solidaridad preexistentes es la forma más efectiva de captación y parece ser típica de los movimientos por el cambio institucional a gran escala (Snow, Zurcher y Eckland-Olson, 1980). De otro lado, los grupos con identidades débiles, escasas redes intragrupalas y fuertes lazos con personas ajenas, son menos susceptibles de movilizarse. Como ha establecido Foster (1974), entre los trabajadores industriales ingleses las comunidades caracterizadas por una interrelación de clase fuerte basada en matrimonios y en la participación en actividades de tiempo libre se movilizan con mayor prontitud y alcance que aquéllas con débiles redes y/o lazos fuertes fuera de su clase. Asimismo, Jenkins (1982a) encontró que los trabajadores agrícolas temporeros que eran inmunes a relaciones de tipo paternal

con respecto a sus empleadores y que establecían lazos a través de un trabajo cohesivo y de redes de afiliación, se movilizan con mayor facilidad que los inmigrantes que carecían de lazos intergrupales o que los trabajadores permanentes que eran más susceptibles de ser controlados por los empleadores.

Las estrategias de captación siguen los mismos principios básicos. Las campañas centradas en torno a incentivos expresivos y de solidaridad, que apuntan a grupos preexistentes o «naturales», y que relacionan la visión del cambio a una cultura previa son más efectivas. Los sindicatos agrarios que incidían en las conquistas de «pan y mantequilla» tenían menos éxito que los que organizaban eventos solidarios y lanzaban programas de preparación ideológica (Jenkins, 1982a). De modo similar, la captación individual requiere mayores inversiones de recursos y es mucho más lenta que la captación en bloque (Snow, Zurcher y Eckland-Olson, 1980; Jenkins, 1982a). Los organizadores que apelan a los símbolos culturales de la población a la que se dirigen tienen más éxito que los que inciden preferentemente en ideologías abstractas (Brill, 1971).

La captación diferencial (*differential recruitment*) sigue, en esencia, los mismos principios. La captación tiende a seleccionar a los individuos que están más integrados en redes interpersonales (Pinard, 1971; Leahy y Mazur, 1978; Snow, Zurcher y Eckland-Olson, 1980), que son más activos en organizaciones políticas que apoyan el cambio social (Von Eschen, Kirk y Pinard, 1971; Barnes y Kaase, 1979; E. J. Walsh, R. H. Warland, ponencia no publicada), que están socialmente comprometidos con el cambio social (Bolton, 1972; Frenndrich, 1974) y que están estructuralmente disponibles para la participación (Orum, 1972; Snow, Zurcher y Eckland-Olson, 1980). La captación diferencial cambia también a medida que el movimiento se amplía. Las primeras captaciones del movimiento estudiantil estaban constituidas por personas que provenían de un ámbito socioeconómico comparativamente privilegiado y que estudiaban en universidades de elite, que eran más activas en organizaciones políticas y estaban más comprometidas con las ideologías del cambio social que las personas posteriormente captadas (Lipset, 1971:81-88; Wood, 1974). Del mismo modo, las clases sociales parecen responder a diferentes incentivos. En general, los grupos de clase media o alta son más receptivos a los incentivos expresivos, mientras que

los grupos de clase baja responden a incentivos selectivos y a la solidaridad colectiva (J. Wilson, 1973:72-73). La participación diferencial también tiende a ser receptiva a diferentes incentivos. Oliver (1982) descubrió que los cuadros a tiempo completo en el movimiento vecinal estaban más comprometidos ideológicamente, mientras que los activistas transitorios estaban más preocupados por los beneficios personales. En otras palabras, las recompensas monetarias que recibe el personal profesional son probablemente un factor secundario con respecto a las inquietudes ideológicas, como parece sugerir el bajo nivel salarial.

Nótese que la discusión precedente ignora la atención privilegiada que los estudios clásicos sobre la captación diferencial prestan al papel que juegan las características de la personalidad. Si bien las diferentes personalidades juegan sin lugar a dudas un papel en la captación diferencial, los estudios al respecto no son concluyentes en lo que se refiere al establecimiento de los factores de la personalidad que resultan relevantes y, más importante aún, han sido incapaces de demostrar metodológicamente que tales factores son independientes de las características sociales que llevan a la captación y participación diferenciales.

LA ORGANIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

El principal debate sobre la organización de los movimientos se ha dado entre quienes proponen un modelo burocrático centralizado (Gamson, 1975; McCarthy y Zald, 1973, 1977) y quienes abogan por un movimiento informal descentralizado (Gerlach y Hine, 1970). El primero de estos modelos sostiene que una estructura formalizada con una clara división del trabajo maximiza la movilización, al transformar compromisos difusos en roles claramente definidos, y que una estructura centralizada de toma de decisiones aumenta la capacidad de intervención inmediata, al reducir los conflictos internos (Gamson, 1975:89-109). En contraste con esta postura, Gerlach y Hine (1970:34-56) sostienen que los movimientos descentralizados con una mínima división del trabajo e integrados por redes informales y por una ideología de amplio espectro son más efectivos. Una estructura segmentada y descentralizada maximiza la movilización al establecer la-

zos interpersonales extensos que generan solidaridad y refuerzan el compromiso ideológico. Además, una estructura de este tipo es fácilmente adaptable, invita a la experimentación táctica, a la competencia entre los subgrupos y establece una reducción de la vulnerabilidad del grupo con respecto a su eliminación o cooptación por parte de las autoridades.

Este debate ha sido, no obstante, gravemente desencauzado por diversas interpretaciones erróneas. Algunos analistas (especialmente Gerlach y Hine) asumen que el debate se centra en torno a la identificación de la típica y única forma de organización del grupo. Como Zald y Ash (1966) argumentaban hace ya algún tiempo, los movimientos adoptan diferentes formas dependiendo de sus objetivos. Los movimientos del cambio personal tienden a adoptar estructuras descentralizadas y reglas de afiliación exclusivas, mientras que los movimientos del cambio institucional son prototípicamente centralizados e inclusivos (Curtis y Zurcher, 1974). Por otro lado, los analistas han ignorado la distinción entre los movimientos sociales (MS) definidos en función de objetivos amplios y las organizaciones de movimientos sociales (OMS) definidas por estructuras particulares de organización. Dado que los movimientos sociales se caracterizan normalmente por múltiples OMS, un modelo de multiorganización que permita la coexistencia de tipos diferentes resulta en general más apropiado de cara a calibrar la organización de un único movimiento social (Zald y McCarthy, 1980). Por último, a menudo se han tomado estas formulaciones como generalmente descriptivas más que como extremos ideales típicos. La investigación actual indica que existen también formas intermedias de OMS: estructuras centralizadas con locales semiautónomos (por ejemplo, la NAACP o el movimiento obrero), así como locales autónomos coordinados débilmente a través de estructuras federativas (como el movimiento de arrendatarios).

El estudio más amplio llevado a cabo sobre la organización de los movimientos ha sido el análisis de la modernización de la acción colectiva desarrollado por Charles Tilly (1978) y por sus colaboradores (Shorter y Tilly, 1974; Tilly, Tilly y Tilly, 1975; Tilly y Tilly, 1981). A partir de la distinción clásica entre la organización comunitaria y la asociativa, sus estudios documentan el cambio considerable que se ha experimentado a lo largo de los cuatro últimos siglos, desde las acciones reactivas limitadas, lle-

vadas a cabo por grupos de solidaridad de pequeña escala (o por comunidades), hasta las acciones proactivas amplias, desarrolladas por asociaciones a gran escala y con un objetivo definido. Este cambio se adecua en términos generales al que ha llevado de los movimientos comunitarios de estructura informal a las OMS centralizadas y formalmente estructuradas. Los principales factores de este cambio han estado ligados al amplio marco del desarrollo social. El desarrollo del capitalismo industrial y la construcción de los Estados modernos acabaron con la autonomía de los pequeños grupos de solidaridad y forzaron a los demandantes a actuar en el marco del amplio escenario de la política nacional, en el que los números grandes y las estructuras burocráticas tenían la llave del éxito. Además, la urbanización y el crecimiento de los medios de comunicación de masas redujeron los costos de la movilización a gran escala, haciendo las estructuras burocráticas más factibles. Por último, la institucionalización de la democracia liberal, y en especial de la participación electoral masiva, permitieron un ambiente propicio para que las organizaciones de los movimientos pudieran movilizar un amplio volumen de apoyos. A medida que el grupo comunitario tradicional dio paso a la moderna asociación burocrática, los objetivos y las formas de acción cambiaron. Los actores comunitarios eran «radicales instintivos» (*instinctive radicals*), que consideraban las intrusionas externas como violaciones fundamentales, mientras que las asociaciones eran más moderadas, maximizando las ganancias en el contexto de un marco político concreto (Calhoun, 1982). Los primeros adoptaron un repertorio de actuaciones relativamente fijo, prestado de las estructuras de autoridad existentes, mientras que estas últimas eran más flexibles, experimentando con diversas formas de acción y, al menos en las democracias liberales, adoptando las manifestaciones masivas como medio de señalar la dimensión numérica del apoyo. Las OMS profesionales de McCarthy y Zald (1973, 1977), con su confianza en personal profesional, recursos externos y equipos transitorios, pueden ser consideradas como un producto directo de esta tendencia general.

No obstante, a pesar de este cambio importante, diversos movimientos descentralizados han continuado surgiendo. A menudo las estructuras descentralizadas son el producto de decisiones deliberadas por parte de los movimientos de redención o

de cambio personal, que intentan encarnar ideales con la esperanza de que éstos sirvan como modelos a imitar. El movimiento estudiantil, y en concreto el Students for a Democratic Society (SDS), adoptaron modelos de estructura democráticos y «sin líderes» con el objetivo de maximizar los valores de la participación directa y del compromiso comunitario y para evitar los peligros de la oligarquía y la cooptación (Breines, 1980, 1982; Case y Taylor, 1979). Las estructuras descentralizadas pueden también surgir a partir de limitaciones de tipo ecológico y de modelos heredados. Por ejemplo, Judkins (1979) sostiene que la dispersión geográfica y la estructura de liderazgo competitiva del movimiento contemporáneo de apoyo a las víctimas del *black lung* han creado una estructura descentralizada más próxima a una federación de secciones que a la estructura burocratizada que dicen adoptar. Del mismo modo, Freeman (1979) sostiene que las dos corrientes del movimiento de mujeres desarrollaron estructuras diferentes en función de experiencias políticas, valores, referencias y relaciones con los objetivos que habían sido heredadas de las primeras organizadoras. Si bien ambas corrientes contaban con recursos similares, la corriente más «antigua» (NOW, WEAL, NWPC) estaba organizada por mujeres cuya experiencia partía de las políticas de reforma convencionales y cuyos valores y referencias ponían su énfasis en la efectividad en la consecución de cambios institucionales. Las estructuras burocráticas fueron adoptadas por ser los medios familiares que habían sido utilizados por los movimientos obrero y de los derechos civiles. Por su parte, la corriente más «joven» surgió de las últimas fases del movimiento estudiantil y consecuentemente incidía en la participación directa y en el cambio personal como medios de anticipar la revolución social. Una vez conformadas, las estructuras de organización canalizan las acciones y permanecen relativamente inalterables. A medida que retrocedían las expectativas de una revolución, las estructuras descentralizadas canalizaron su acción hacia actividades de cambio personal, como por ejemplo la concienciación o los proyectos de educación y prestación de servicios. A pesar de los compromisos retóricos con el cambio institucional, las acciones en esta dirección fueron, en lo que se refiere a su organización, bloqueadas por las estructuras descentralizadas.

Incluso en el marco básico de un contexto determinado, las

estructuras de organización de los movimientos pueden evolucionar. No obstante, contrariamente a los postulados de la teoría clásica de Weber y Michels, el cambio no se dirige inevitablemente en la dirección de una progresiva burocratización. A medida que la National Organization for Women (NOW) se expandía a mediados de los años setenta hasta convertirse en la más importante organización del movimiento de mujeres, se orientó hacia una mayor diversificación en su interior y desarrolló una estructura más descentralizada integrada por fuerzas dedicadas a cuestiones específicas que permitían acomodar las diversas ideologías e intereses de un número de afiliadas rápidamente creciente (Carden, 1978). Del mismo modo, Hertz (1981) sostiene que el crecimiento del movimiento de los derechos al bienestar a finales de los sesenta dio lugar a un campo de múltiples organizaciones coordinadas de modo informal, que le daban al movimiento la ventaja de una estructura descentralizada. Si bien esta situación originó controversias internas sobre la distribución de los recursos, la descentralización redujo las tendencias al desarrollo de facciones, permitiendo a los militantes trabajar en función de diversas inquietudes. Esto mismo puede decirse de la multiplicidad de organizaciones del movimiento por los derechos civiles durante su fase de expansión (McAdam, 1982). Asimismo, las organizaciones de los movimientos pueden preservar sus estructuras comunitarias descentralizadas a través de la adopción de restricciones en el tamaño, de la utilización de la crítica para contener a los principales activistas, de la permanencia en una situación de marginación económica, dependiendo estrictamente de la financiación interna, y de los intentos de reducir las diferencias entre los participantes en lo que se refiere a sus conocimientos sobre las cuestiones relevantes (Rothschild-Whitt, 1979).

Estos estudios subrayan la clásica premisa de Zald y Ash (1966) según la cual las diferentes estructuras de organización resultan más o menos eficaces en función de diferentes objetivos. Las estructuras burocráticas dan experiencia técnica y coordinación esenciales de cara a la consecución de cambios institucionales, pero resultan menos efectivas de cara a la movilización de una participación de base. Las estructuras descentralizadas maximizan la transformación personal, movilizan así una participación de base y asegurando la permanencia del grupo, a

costa a menudo de efectividad estratégica. Las organizaciones de movimientos que intentan combinar elementos incongruentes deben así afrontar dilemas de orden estratégico. El movimiento en contra de la energía nuclear, por ejemplo, ha logrado movilizar una base de forma efectiva gracias a sus estructuras de participación descentralizadas, pero a pesar de la adopción de métodos innovadores para la toma de decisiones por consenso, el proceso de consulta a los numerosos «grupos de afinidad» (*affinity groups*) ha limitado significativamente su efectividad estratégica (Barkan, 1979). Del mismo modo, las considerables tensiones en el seno del SDS acabaron por llevar a su organización al colapso a finales de los años sesenta, debido en parte a que las estructuras descentralizadas eran, en última instancia, incompatibles con los proyectos de movilización de masas desarrollados en contra de la guerra del Vietnam (Gitlin, 1980:133-136, 156-162). De hecho, Starr (1979) argumenta que esta dicotomía en las formas de organización es hasta tal punto significativa que puede dar cuenta de los diferentes destinos de varios movimientos sociales de finales de los sesenta. Organizaciones «ejemplares» como las comunas y cooperativas (*co-ops*) acabaron colapsándose, bien por su carácter introvertido y por el hecho de estar socialmente aisladas, bien porque sus estructuras descentralizadas bloqueaban una movilización a gran escala. Al mismo tiempo, otras organizaciones que perseguían reformas moderadas sobrevivieron y acabaron siendo políticamente incorporadas, dado que sus estructuras centralizadas les permitieron cooptar recursos institucionales (por ejemplo, los medios de comunicación alternativos), o bien porque requerían una mínima participación de base (por ejemplo, las organizaciones de comunidades o los grupos de presión sobre los intereses públicos).

No obstante, la mayor parte de las OMS se emplazan en algún punto intermedio entre los modelos burocrático y descentralizado. Esto puede potencialmente permitir el aprovechamiento de las ventajas que de cara a la movilización presenta la descentralización, así como de las ventajas técnicas propias de la centralización. Además, la mayor parte de los movimientos sociales contienen múltiples OMS. La experiencia de los derechos civiles sugiere que la coordinación informal entre diferentes OMS basada en una ideología y unos objetivos compartidos puede permitir las ventajas de la descentralización al tiempo que permiten

un nivel suficiente de empuje centralizado que logra cosechar las ventajas inherentes a la centralización (McAdam, 1982).

LA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Las teorías sobre los efectos de los movimientos sociales han sido formuladas tradicionalmente a partir del modelo de desarrollo de un «sistema cerrado»; es decir, a partir de la afirmación de una evolución secuencial o «ciclo de vida» por el que pasan los movimientos y que culmina bien en el colapso, bien en la acomodación institucional (Hopper, 1950; Lang y Lang, 1961). En contraste con esta hipótesis, los teóricos de la movilización de recursos han adoptado un enfoque que parte de un «sistema abierto», afirmando que los efectos de los movimientos dependen en buena medida de un contexto político más amplio. Los resultados de los desafíos que presentan no están sólo en función de elecciones estratégicas, sino también de las instancias de las elites políticas y del apoyo/oposición de las organizaciones de interés establecidas y de otros movimientos. El equilibrio entre los apoyos y el control social está, a su vez, conformado por los cambios en las coaliciones de gobierno, la estructura de los regímenes y las crisis sociales que a su vez dan lugar a crisis en el seno de dicho régimen.

Las más importantes controversias han girado en torno al análisis relativamente elemental de Gamson (1975) sobre los éxitos y fracasos de 53 organizaciones de movimientos activos en Estados Unidos entre 1800 y 1945 seleccionados aleatoriamente. Gamson mide el éxito en función de dos dimensiones: la consecución de beneficios tangibles que responden a los objetivos establecidos por la organización de los movimientos, y la aceptación formal de la organización del movimiento por parte de su antagonista principal como representante válido de un abanico de intereses legítimos. Los resultados de los movimientos son clasificados en cuatro categorías: éxito completo, cooptación (aceptación sin beneficios); apropiación (*preemption*) (beneficios sin aceptación) y fracaso. En general, las organizaciones de movimientos que tienen éxito presentaban una estructura burocrática, perseguían objetivos limitados, empleaban incentivos selectivos, gozaban de apoyo financiero, utilizaban métodos de de-

sobediencia (sin excluir la violencia) y formulaban sus demandas en períodos de crisis sociopolíticas. Las organizaciones cooptadas tienden a tener una afiliación más amplia y estructuras formalizadas, planteando sus demandas en períodos de guerra. Por lo general, las organizaciones apropiadas son pequeñas, de control centralizado y menos activas en períodos de crisis.

Si bien estudios posteriores han confirmado los principales descubrimientos de Gamson (Steadly y Foley, 1979), Goldstone (1980) argumenta que las consideraciones sobre la organización y la estrategia son bastante irrelevantes una vez que se han introducido controles en lo que se refiere a los objetivos (desplazamiento *versus* no desplazamiento del antagonista) y al contexto político (crisis *versus* ausencia de crisis). Las organizaciones que no aspiraban a desplazar a su antagonista tuvieron en general éxito, lo que sugiere que la política americana es fundamentalmente receptiva a los movimientos que buscan reformas. Los éxitos suelen llegar en momentos de crisis, lo cual parece indicar que los movimientos tienen poco control sobre su efectividad. Sin embargo, Gamson (1980) ha cuestionado drásticamente estos argumentos, demostrando que las conclusiones de Goldstone se basan en una recodificación errónea de varios casos, en una concepción estrecha del significado del éxito y en una interpretación ambigua de los períodos de «crisis». Goldstone define el éxito a partir de cualquier beneficio tangible, al margen de que provenga del principal antagonista o de antagonistas secundarios. Además, la «crisis» es considerada de manera *ad hoc*, incluyendo no sólo períodos de depresión económica y guerras, sino también virtualmente cualquier cambio social rápido que afecte al grupo en cuestión.

De hecho, el modelo de Gamson es más vulnerable al argumento contrario, según el cual utiliza un concepto del éxito demasiado estrecho. Turner y Killian, por ejemplo, ofrecen tres criterios de éxito: beneficios para los miembros, cambios en las relaciones de poder y la realización de un «programa para la reforma de la sociedad» (1972:256). Los dos primeros criterios resultan más útiles de cara sobre todo al establecimiento de comparaciones, habida cuenta que el tercero es propio de cada movimiento específico y constituye más una unidad de medida idealizada que un criterio claro. Incluso utilizando esta gama restringida, los criterios de Gamson son extremadamente limita-

dos, al trabajar sólo con formas tangibles de los primeros y medidas relativamente débiles de los segundos. Si bien es cierto que los logros no tangibles como una autopercepción más positiva pueden ser menos susceptibles de medición, no por ello dejan de ser objetivos significativos de los movimientos. Más problemática todavía es la valoración de Gamson a propósito de los cambios en las relaciones de poder. En general, los cambios en el poder social (cf. Lukes, 1974; Domhoff, 1979:121-150) pueden calcularse de tres modos: cambios a corto plazo en los efectos de las decisiones legítimas (por ejemplo, efectos de las políticas públicas); alteraciones en la composición y organización de las elites que toman las decisiones (por ejemplo, circulación de elites y cambios en el régimen), y cambios a largo plazo en la distribución de bienes socialmente valorados (por ejemplo, transformación de la estructura de clases y de las jerarquías del prestigio social). La aceptación formal es una medida extremadamente débil de la segunda dimensión. En el período posterior al *New Deal* estadounidense, por ejemplo, las elites políticas permitieron de modo creciente la participación formal de los líderes de los movimientos en audiencias públicas y procedimientos legales. El acceso formal, sin embargo, no ha supuesto la consecución consistente de beneficios tangibles, en parte debido al carácter contingente de la implementación de las políticas (Handler, 1978). De hecho, este acceso formal ha desviado a menudo a potenciales prestatarios de apoyo, que podían considerar que sus intereses estaban siendo tenidos en cuenta, reduciendo así su nivel de movilización y la posibilidad de logros significativos (Edelman, 1971). En otras palabras, la cooptación debería ser borrada de la lista de efectos considerados como un éxito, y se debería incluir un espectro más amplio de cambios en las relaciones de poder.

El más importante desafío al modelo de Gamson proviene del argumento de Piven y Cloward (1977) según el cual los movimientos de la gente pobre (*poor people's movements*) sólo consiguen logros a partir de una postura de desafío masivo, mientras que la construcción de organizaciones con afiliados permanentes es inherentemente contraproducente,

a. porque la gente pobre no es capaz de construir organizaciones políticas permanentes del mismo modo que lo hacen los segmentos más privilegiados, y

b. debido a los efectos desmovilizadores de la construcción de la organización.

En lugar de enfocar los compromisos y de maximizar la flexibilidad de la estrategia, las organizaciones formalizadas apartan las energías del desafío masivo y proporcionan a las elites políticas un foro para la propagación de formas de tranquilización simbólicas, contribuyendo de este modo a la desmovilización del desafío masivo. La evidencia que apoya esta teoría proviene de estudios sobre el impacto que tuvieron los disturbios urbanos de los años sesenta en el desarrollo de las políticas. Con la única excepción de Albritton (1979), estos estudios demuestran que la dimensión de las movilizaciones y los considerables daños que tales disturbios ocasionaron dieron lugar a la expansión de los beneficios sociales y al aumento en los gastos en bienestar y en otros programas sociales relacionados (Button, 1978; Jennings, 1979; Isaac y Kelly, 1981; Griffin, Devine y Wallace, 1981; Hicks y Swank, 1981). Piven y Cloward parecen estar en lo cierto en lo que se refiere a dos cuestiones: la organización formalizada no es un prerrequisito de la movilización masiva y los conflictos institucionales originados por el desafío masivo dan lugar, efectivamente, a beneficios tangibles a corto plazo.

La principal dificultad que presenta la teoría de Piven-Cloward es la idea según la cual la organización formalizada es de manera inherente incompatible con el desafío masivo. Los datos de Gamson, por ejemplo, muestran una relación positiva entre el grado de organización y la desobediencia. De las 53 organizaciones estudiadas, aquellas que utilizaban la violencia y otras formas de coacción estaban más formalizadas y controladas de forma centralizada (62 y 75 % *versus* 45 y 53 %). Además, varios movimientos de gente pobre recientes han utilizado de manera efectiva la organización formalizada. La *United Farm Workers' Union*, por ejemplo, no sólo ha construido una organización formalizada y controlada de forma centralizada, sino que además ha utilizado esta estructura con éxito en la organización de huelgas masivas (Jenkins, 1984). Del mismo modo, la organización de la afiliación por parte de los movimientos de los derechos al bienestar fue de hecho bastante efectiva. Entre 1967 y 1970, al menos, la organización de secciones de los movimientos y la movilización de desafíos masivos fueron de la mano (West,

1981:292-303). El cambio clave se produjo en 1970, cuando las legislaciones estatales y las administraciones de servicios sociales comenzaron a reducir sus programas especiales de financiación a través de los que se facilitaban incentivos selectivos a los organizadores de la NWRO, recortando así la política de afiliaciones y dejando a los líderes con pocas alternativas ajenas a la actuación como grupo de presión ante el sistema legislativo.

Si la desobediencia parece en general efectiva, el panorama se vuelve más confuso si tomamos en consideración otras formas de conflicto. Snyder y Kelly (1976), por ejemplo, argumentan que si bien las huelgas con éxito en Italia se asocian tanto con la violencia colectiva como con el nivel de afiliación sindical, es la afiliación sindical la que explica la relación entre la violencia y el éxito de la huelga. La eficacia de la violencia depende también del contexto institucional y de los objetivos del movimiento. Burstein (1981) ha mostrado cómo los disturbios urbanos han podido generar un aumento en los gastos sociales, pero han actuado también en contra de la adopción de medidas legislativas sobre los derechos civiles. Al mismo tiempo, las manifestaciones pacíficas fueron también productivas, tanto directamente por presión sobre las elites políticas como indirectamente por el estímulo de los cambios en la opinión pública. De modo similar, las protestas pacíficas de los movimientos en contra de la guerra entre 1964 y 1970 resultaron efectivas de cara al cambio en el seno de la opinión pública y a la legitimación de la opción de la retirada, incidiendo así en los cambios de voto en el Senado respecto a las mociones relativas a la guerra de Vietnam. Después de 1970, no obstante, las protestas fueron contraproducentes a medida que dejaron de producirse nuevas modificaciones en la opinión pública, que las consideraciones fiscales pasaron a ser prioritarias en el Congreso, y que la cuestión empezó a ser la naturaleza, vías y detalles de la retirada (Burstein y Freudenberg, 1978). La eficacia de la violencia también depende de la significación que adquieren terceras instancias o públicos observadores de los resultados. Dado que la violencia tiende a alienar a estas terceras instancias, ésta suele reducir también las posibilidades de éxito en el establecimiento de plataformas amplias en las que su apoyo adquiere una importancia crítica (Schumaker, 1978; Garrow, 1978:158-160).

Habida cuenta que la cobertura informativa por parte de los medios de comunicación de masas es decisiva, tanto de cara a la

información de las elites y del público general acerca de las acciones del movimiento, como en lo que se refiere a la formación de una moral y una imagen propia de los activistas del movimiento, habremos de considerar a los *mass media* como importantes actores en los conflictos políticos. La cobertura informativa depende, no obstante, de la estructura de la organización del medio. Es más probable que los periódicos de las grandes ciudades con públicos de clase media e integrantes de las elites cubran las acciones de protesta a que lo hagan los periódicos más pequeños y menos profesionalizados (Goldenberg, 1976). De igual modo, hasta que las cadenas de televisión desarrollaron nuevos cuadros profesionales a finales de los años cincuenta, este medio permaneció inaccesible. Más sutiles fueron los efectos de los movimientos en reportajes especiales y en la organización de los criterios de programación. Bajo la presión de la administración de Nixon a principios de los setenta, los *managers* nacionales de la información redujeron sistemáticamente su cobertura de las manifestaciones multitudinarias (Hodgson, 1976:374-379). Además, los esquemas de principios utilizados de forma rutinaria por los medios de comunicación en la presentación de las informaciones imponen límites específicos. Las noticias deben ser «nuevas» e «interesantes». Los movimientos deben, por lo tanto, moverse en una estrecha línea entre la excentricidad (que aliena a terceros, pero asegura la cobertura informativa) y la convencionalidad (que puede ser persuasiva, pero que es ignorada por los medios de comunicación). Por otro lado, la cobertura de la noticia no siempre es adecuada de cara al proselitismo del movimiento. Las noticias se centran más en la acción que en el contexto, dejando a los lectores o televidentes en la ignorancia en lo referente a las causas y objetivos del movimiento. A la larga, la movilización que se basa en los medios de comunicación resulta un sustituto débil de los métodos más directos. La cobertura informativa tiende también a presentar a los líderes como estrellas del movimiento, agravando rivalidades internas y tendencias al espectáculo por parte de éstos, y debilitando de esta forma la movilización (Molotch, 1979; Gitlin, 1980).

Las alianzas más importantes con terceras instancias se forman probablemente de manera independiente al papel desarrollado por los medios de comunicación, debido a esta vulnerabili-

dad de la cobertura informativa. Los boicots que realizó con éxito la United Farm Workers, por ejemplo, dependían del fuerte apoyo recibido de las Iglesias liberales y de los sindicatos de trabajadores, que ya habían colaborado con la organización antes del inicio de las campañas de protesta (Jenkins, 1984). De igual modo, la creciente influencia política de la NAACP a lo largo de los años sesenta se debió en parte a la creciente fuerza y a la densidad del apoyo entre organizaciones que se desarrollaron al margen de la cobertura informativa (Aveni, 1978).

Estos estudios fundamentan, en general, la tesis de Tilly (1978:125-133) según la cual la entrada en el ámbito de la comunidad política a través de la alianza con una parte de sus miembros es un ingrediente esencial del éxito. El acceso a la comunidad política ocasiona un incremento cualitativo en los resultados de la acción colectiva y protege al movimiento de la represión. La más clara evidencia en este sentido la aporta el estudio de Ragin, Coverman y Hayward (1982) sobre las huelgas en Inglaterra. Después de que la clase trabajadora inglesa se hubiera asegurado el acceso a la participación electoral en 1918, el Partido Laborista se aseguró representación parlamentaria y alcanzó fuerza suficiente como para formar parte de diversas coaliciones gubernamentales. Los éxitos de las huelgas se incrementaron significativamente y la razón de la inversión de recursos (número de días de huelga por hombre) respecto a los logros de tales huelgas descendió de manera acusada.

¿Qué circunstancias determinan el acceso al ámbito de la política? Tilly (1978:213-214) ofrece una interpretación de carácter político, al argumentar que la formación de una coalición de miembros que establezca un desafío depende, en buena medida, del cálculo de ventajas políticas que se les puede presentar a corto plazo. Si la comunidad política está estrechamente dividida, si los miembros han perdido a sus compañeros de coalición tradicionales, o si los miembros se arriesgan por el acceso a los recursos, la estrategia, en general arriesgada, de apoyar la entrada de un movimiento, puede contar con más posibilidades de ser adoptada. Si la coalición tiene éxito, el movimiento se asegura el acceso, y las reglas de la pertenencia a la comunidad política son reestructuradas en función del poder de su base. Otros han estudiado estas crisis de los regímenes a partir de transformaciones económicas subyacentes. Piven y Cloward (1977), por

ejemplo, argumentan que los movimientos de gente pobre sólo se aseguran el acceso en momentos de crisis del régimen surgidas a partir de rupturas económicas tan trascendentes como pueden ser, por ejemplo, las depresiones o la reorganización completa de las economías regionales. Tales rupturas debilitan a los grupos dominantes precedentes, al tiempo que exacerban las diferencias entre las élites nacionales, incrementando así la probabilidad de una división en el seno de las élites que podría ocasionar un apoyo por parte de un sector de éstas a los movimientos. De modo similar, Skocpol (1979) sostiene que las revoluciones sociales se crean a partir de crisis generalizadas de los regímenes, ocasionadas en muchos casos por sobrecargas fiscales y por pérdidas considerables en enfrentamientos bélicos que acentúan antiguos conflictos entre los grupos dominantes, y, a raíz del debilitamiento de la capacidad represiva del Estado, abren la vía a revueltas campesinas a gran escala.

Estas formulaciones pueden también hacerse extensivas al tratamiento de los cambios de rutina en el poder político, que generan posibilidades de acceso a los movimientos reformistas. El proceso depende de las reglas que determinan el acceso al ámbito de la política. En los regímenes democráticos liberales, el Estado es un «sistema de poder alternativo» en potencia, regulado por la movilización a gran escala (Schattschneider, 1960; Wrong, 1979:197-217). El acceso a la política está entonces regulado por amplios cambios en la opinión pública y por la movilización de coaliciones electorales que, a su vez, establecen cambios en las coaliciones gobernantes. Si una coalición de gobierno favorable está en el poder, los movimientos de reforma con amplia afiliación pueden ofrecer apoyo electoral a cambio de su entrada en el ámbito político. Por ejemplo, la entrada con éxito del ala moderada del movimiento de los derechos civiles a mediados de los años sesenta partió de cambios en la rutina del poder político. Después de la segunda guerra mundial, los blancos del Sur se volvieron gradualmente más tolerantes respecto a la reforma de las relaciones interraciales, debido presumiblemente a la decreciente importancia de la economía de plantación a la que había estado ligado tradicionalmente el sistema de discriminación racial (Burstein, 1979). Paralelamente, la migración negra a las ciudades del Norte situó a los votantes negros en una posición electoral estratégica, dándoles el margen necesario

para la victoria en varios de los más importantes Estados industriales (Brink y Harris, 1963). El carácter progresivamente oscilante del voto negro aceleró esta tendencia, obligando a los candidatos nacionales de ambos partidos a prestarle una atención creciente. El elemento final fueron las elecciones de 1964, que asentaron firmemente en el poder a una coalición gobernante de centro-izquierda, gracias a los votos de la clase obrera blanca, al «sólido Sur» («*solid South*»), a un creciente número de liberales de clase media-alta y, por supuesto, gracias a la población negra de las ciudades. Al detentar por primera vez desde los años treinta el control tanto de la presidencia como del Congreso, la coalición de centroizquierda forzó una extensión de la revolución del New Deal de la que formaron parte las Actas de Derechos Civiles de 1964 y 1965, que daban la libertad a la población negra del Sur y desmantelaban el sistema de discriminación racial hasta entonces imperante.

Las reorientaciones electorales amplias ligadas a cambios en las coaliciones de gobierno, dado que configuran las oportunidades políticas, pueden también regular la extensión o contracción de los movimientos sociales. La dinámica de la expansión es en buena medida producto de dos factores: el estímulo que suponen las crecientes oportunidades y el «efecto de demostración pública» del éxito del movimiento. El ejercicio del poder por parte de una coalición de centro-izquierda incrementa, por lo general, las oportunidades de los movimientos de reforma al reducir las probabilidades de represión y al incrementar las probabilidades de apoyo por parte de miembros del ámbito de la política. Del mismo modo, un desafío con éxito aumenta la moral de otros sectores, proporciona modelos de tácticas efectivas y a menudo libera recursos institucionales para otros movimientos. Esta dinámica funciona también en sentido contrario. La proliferación de movimientos puede minar las coaliciones electorales a través de la introducción de cuestiones que pueden estimular una retracción por parte de antiguos miembros de las coaliciones, que pueden entonces transferir su apoyo electoral a la coalición de centro-derecha. Una vez en el poder, la nueva coalición de gobierno intenta desmovilizar el sector de los movimientos sociales, aumentando la represión en contra de los activistas e intentando reducir el apoyo institucional a los movimientos. En términos generales, esta dinámica parece encajar en la expan-

sión y la contracción del sector de los movimientos sociales a lo largo de los años sesenta y setenta en Estados Unidos (Jenkins, 1982b) y parece ser un rasgo básico del proceso político de la reforma social en los regímenes liberal-democráticos (Tarrow, 1982).

Las reglas que gobiernan el desarrollo rutinario de los procesos políticos conforman también la composición del sector de los movimientos sociales y sus lazos con los procesos electorales. En Estados Unidos la existencia de distritos con un solo representante y el sistema de gobierno presidencialista han institucionalizado un bipartidismo caracterizado por organizaciones partidarias débiles que movilizan apoyos más a través de formas de patronazgo que de ideologías. En otras democracias liberales de Europa occidental la representación proporcional y el sistema de gobierno parlamentarista han institucionalizado modelos de multipartidismo, en los que se integran partidos dotados de contenidos ideológicos y que cuentan con una base de apoyos más estable. Como resultado de estos factores, los movimientos sociales en Estados Unidos tienen más posibilidades de permanecer independientes de alianzas partidarias, adoptando estrategias en función de cuestiones concretas, en lugar de asociar sus programas a las campañas electorales o a la posibilidad de establecer definiciones más amplias de dichas cuestiones en función de criterios ideológicos. En este sentido, el éxito de los movimientos de reforma depende quizá más de los resultados electorales en Europa occidental que en Estados Unidos. No obstante, al mismo tiempo, el reciente desarrollo de mecanismos de representación neocorporatistas en varias democracias de la Europa occidental ha debilitado este lazo, reduciendo el poder de los líderes de los partidos y coaliciones parlamentarias, y reforzando el papel de los administradores del Estado y representantes de las principales asociaciones de intereses privados (Schmitter, 1979). No está claro hasta qué punto podrán las relaciones neocorporatistas conseguir en el futuro la cooptación selectiva de nuevos movimientos para integrarlos en estrategias partidarias de oposición amplias. Si el estudio de Nelkin y Pollak (1981) sobre el movimiento de oposición a la energía nuclear en Alemania añade nuevas consideraciones al debate, éstas se articulan en torno a la cuestión de la centralización de las instituciones estatales y al carácter restrictivo del acceso a los cuerpos de toma de

decisiones. El claro predominio del movimiento de oposición que representa el partido de los Verdes en Alemania Occidental se deriva de la mayor permeabilidad de un Estado federal en comparación con un Estado unitario, y del mayor grado de acceso público a las agencias de gobierno. En este contexto, el neocorporatismo no ha tenido éxito en su intento de desviar de su curso a los movimientos.

EL FUTURO DE LA TEORÍA DE LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

El futuro de la teoría de la movilización de recursos se orienta en dos direcciones: la extensión del modelo básico de la comunidad política hasta abarcar una gama de regímenes más amplia y en el refinamiento del modelo básico de movilización a través del desarrollo de una psicología social de la acción colectiva más sofisticada. El principal centro de atención del modelo de la comunidad política es la relación entre los cambios de régimen y las oportunidades de acceso a la política. La investigación se ha limitado en buena medida a los regímenes democrático-liberales, asociando el acceso de los movimientos a los cambios en las alianzas electorales, en las coaliciones de gobierno y en la estructura institucional del Estado. El desarrollo del neocorporatismo ofrece la tesis más provocativa de cara a los análisis futuros. ¿Permitirá el neocorporatismo que las elites de gobierno coopten selectivamente los movimientos o las fuerzas de oposición para integrarlos en coaliciones más amplias con terceras instancias? Allí donde el neocorporatismo está débilmente desarrollado (como en Estados Unidos) ¿continuarán regulando las coaliciones de partidos y las alianzas con miembros del ámbito político el acceso de los movimientos reformistas que centran su actuación en cuestiones específicas? La ausencia de estudios más patente es la que afecta a los análisis sobre los regímenes autoritarios y de partido único. ¿Son actualmente las democracias liberales más permeables? ¿Juegan las rupturas de las elites en el seno de estos regímenes el mismo papel que los enfrentamientos entre partidos en lo que se refiere a la apertura o cierre del acceso? ¿Tienen los mecanismos corporatistas en estos casos las mismas implicaciones que en las democracias liberales?

La preocupación principal del modelo de movilización es la relación entre el interés colectivo y la selección de los recursos. Los intereses colectivos suelen ser considerados como no problemáticos, y su existencia se establece como anterior a la movilización, en lugar de analizarse como construcciones sociales y como productos del proceso de movilización. La crítica de la teoría de Olson sugiere, no obstante, que los intereses colectivos son a menudo emergentes. ¿Cómo se forman estas identidades colectivas? ¿Son los procesos de resocialización esenciales? ¿Existe una lógica de la emergencia que determina el contenido de dichas identidades? Por ejemplo, Calhoun (1982) sostiene que las definiciones «radicales» sólo surgen en el seno de comunidades informales densamente interconectadas, en las que se perciben las amenazas como decisivas de cara a todo su estilo de vida. Paige (1975), por el contrario, argumenta que esto se debe a un conflicto subyacente de intereses de suma cero, que prevalece en los sistemas de producción agraria tradicionales. ¿Hasta qué punto no son determinantes tales redefiniciones colectivas de los intereses?

Una vez que la teoría de la movilización de recursos haya ampliado su enfoque en estas dos direcciones, habrá cumplido su principal objetivo, relacionando el estudio de los movimientos sociales con la sociología política comparativa de los Estados y los regímenes y con una psicología social de la acción colectiva más sofisticada.

REFERENCIAS

- Albritton, R. B. (1979), «Social Amelioration Through Mass Insurgency», *American Political Science Review*, 73: 1003-1011.
- Ash-Garner, R. (1977), *Social Movements in America*, Chicago: Rand-McNally.
- Aveni, A. (1978), «Organizational Linkages and Resource Mobilization», *Sociol. Q.*, 19: 185-202.
- Bailis, L. (1974), *Bread or Justice*, Lexington, Ma.: Heath.
- Barkan, S. E. (1979), «Strategic, Tactical and Organizational Dilemmas

- of the Protest Movement Against Nuclear Power», *Social Problems*, 27: 19-37.
- Barnes, S. H. y Kaase, M. (1979), *Political Action*, Beverly Hills, Ca.: Sage.
- Berry, J. M. (1977), *Lobbying for the People*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Bolton, C. D. (1972), «Alienation and Action», *American Journal of Sociology*, 78: 537-561.
- Boyte, H. (1979), *The Backyard Revolution*, Filadelfia, Pa.: Temple University Press.
- Breines, W. (1980), «Community and Organization», *Sociological Problems*, 27: 419-429.
- (1982), *Community and Organization*, South Hadley, Ma.: Bergin.
- Brill, H. (1971), *Why Organizers Fail*, Berkeley: University of California Press.
- Brink, W. y Harris, L. (1963), *The Negro Revolution in America*, Nueva York: Simon and Schuster.
- Brubaker, E. R. (1975), «Free Ride, Free Revelation or Golden Rule?», *J. Law Econ.*, 18: 147-161.
- Burstein, P. (1979), «Public Opinion, Demonstrations and the Passage of Antidiscrimination Legislation», *Public Opinion Q.*, 43: 157-172.
- (1981), «Social Protest, Public Opinion and Public Policy», presentado en el *Annual Meeting of the American Sociological Association*, 76, Toronto (Canadá).
- y Freudenberg, W. (1978), «Changing Public Policy», *American Journal of Sociology*, 84: 99-122.
- Button, J. W. (1978), *Black Violence*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Calhoun, C. (1982), *The Question of Class Struggle*, Nueva York: Oxford University Press.
- Campbell, A.; Converse, P.; Miller W. y Stokes, D. E. (1960), *The American Voter*, Nueva York: Wiley.
- Carden, M. L. (1974), *The New Feminist Movement*, Nueva York: Russell Sage.
- (1978), «The Proliferation of a Social Movement», *Res. Social Movement Conflict Change*, 1: 179-196.
- Carson, C. (1981), *In Struggle*, Cambridge, Ma.: Harvard University Press.
- Case, J. y Taylor, R. C. R. (1979), *Coops, Communes and Collectivities*, Nueva York: Pantheon.
- Collins, R. (1981), «The Microfoundations of Macro-sociology», *American Journal of Sociology*, 86: 984-1014.
- Converse, R. (1972), «Change in American Electorate», en A. Camp-

- bell y P. Converse (comps.), *The Human Meaning of Social Change*, Nueva York: Russell Sage.
- Curtis, R. L. y Zurcher, L. (1974), «Social Movements», *Social Problems*, 21: 356-370.
- Davis, J. A.; Smith, T. W. y Stephenson, C. B. (1981), *General Social Survey*, Ann Arbor, Mi.: Inter University Consortium of Political and Social Research.
- Domhoff, G. W. (1979), *Who Really Rules*, Santa Mónica, Ca.: Good-year.
- Edelman, M. (1971), *Politics as Symbolic Action*, New Haven: Yale University Press.
- Etzioni, A. (1986), *The Active Society*, Nueva York: Free Press.
- Evans, S. J. (1979), *Personal Politics*, Nueva York: Knopf.
- Fendrich, J. N. (1974), «Keeping the Faith of Living the Good Life», *American Sociological Review*, 39: 321-347.
- Foster, J. (1974), *Class Struggle in the Industrial Revolution*, Nueva York: St. Martin's Press.
- Freeman, J. (1973), «The Origins of Women's Liberation Movement», *American Journal of Sociology*, 78: 792-811.
- (1975), *The Politics of Women's Liberation*, Nueva York: McKay.
- (1979), «Resource Mobilization and the Strategy», en M. N. Zald y J. M. McCarthy (comps.), *Dynamics of Social Movements*, Cambridge, Ma.: Winthrop, pp. 167-189.
- Friedland, R. (1980), «Class, Power and Social Control», en M. Zeitlin (comp.), *Classes, Class Conflict and the State*, Cambridge, Ma.: Winthrop, pp. 193-216.
- Frohlich, N.; Oppenheimer, J. A. y Young, O. R. (1971), *Political Leadership and Collective Goods*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Gamson, W. (1968), *Power and Discontent*, Homewood, Il.: Dorsey.
- (1975), *The Strategy of Social Protest*, Homewood, Il.: Dorsey.
- (1980), «Understanding the Careers of Challenging Groups», *American Journal of Sociology*, 85: 1043-1060.
- y Fireman, B. (1979), «Utilitarian Logic in the Resource Mobilization Perspective», en M. N. Zald y J. M. McCarthy (comps.), *The Dynamics of Social Movements*, Cambridge, Ma.: Winthrop, pp. 8-45.
- ; — y Rytina, S. (1982), *Encounters with Unjust Authority*, Homewood, Il.: Dorsey.
- Garner, R. y Zald, M. N. (1981), «Social Movement Sectors and Systemic Constraints», *Working Paper*, núm. 238, CSRO, Ann Arbor, Mi.: University of Michigan.
- Garrow, D. J. (1978), *Protest at Selma*, New Haven, ct: Yale University Press.

- Gerlach, L. y Hine, V. (1970), *People, Power, Change*, Nueva York: Bobbs-Merrill.
- Gitlin, T. (1980), *The Whole World is Watching*, Berkeley, Ca.: University of California Press.
- Goldenberg, E. (1976), *Making the News*, Lexington, Ma.: D. C. Heath.
- Goldstone, J. A. (1980), «The Weakness of Organization», *American Journal of Sociology*, 85: 1017-1042.
- Granovetter, M. (1978), «Threshold Models of Collective Behavior», *American Journal of Sociology*, 83: 1420-1443 [«Modelos de umbral de conducta colectiva», *Zona Abierta*, núm. 54-55, 1990: 137-166].
- Griffin, L. J.; Devine, J. y Wallace, M. (1981), «Accumulation, Legitimation and Politics», presentado en el *Annual Meeting of the American Sociological Association*, 76, Toronto (Canadá).
- Gusfield, J. (1968), «The Study of Social Movements», en *Encyclopedia of the Social Sciences*, Nueva York: Macmillan 14: 445-452.
- (1982), «Social Movements and Social Change», *Res. Social Movements, Conflict Change*, 4: 283-316.
- Hadden, J. K. y Swan, C. E. (1981), *Prime Time Preachers*, Reading, Ma.: Addison-Wesley.
- Handler, J. F. (1978), *Social Movements and the Legal System*, Nueva York: Academic.
- Helfgot, J. H. (1981), *Professional Reforming*, Lexington, Ma.: D. C. Heath.
- Hertz, S. H. (1981), *The Welfare Mothers Movement*, Washington DC: University Press of America.
- Hicks, A. y Swank, D. (1981), «Paying Off the Poor», presentado en el *Annual Meeting of the American Sociological Association*, 76, Toronto (Canadá).
- Hirschman, A. Q. (1970), *Exit, Voice and Loyalty*, Cambridge, Ma.: Harvard University Press. [Salida, voz y lealtad, México: FCE.]
- Hodgson, G. (1976), *America In Our Time*, Nueva York: Doubleday.
- Hopper, R. D. (1950), «The Revolutionary Process», *Social Forces*, 28: 270-279.
- Inglehart, R. (1977), *The Silent Revolution*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Isaac, L. y Kelly, W. R. (1981), «Racial Insurgency, the State and Welfare Expansion», *American Journal of Sociology*, 86: 1348-1386.
- Jackson, L. R. y Johnson, W. A. (1974), *Protest by the Poor*, Lexington Ma.: D. C. Heath.
- Jenkins, J. C. (1981), «Sociopolitical Movements», *Handbook of Political Behaviour*, IV: 81-153.
- (1982a), «The Transformation of a Constituency into a Movement»,

- en J. Freeman (comp.), *The Social Movements of the 1960s and the 1970s*, Nueva York: Longmans.
- (1982b), «Resource Mobilization Theory and the Movements of the 1960s», presentado en el *Annual Meeting of the American Sociological Association*, 77, San Francisco, Ca.
- (1984), *The Politics of Insurgency*, Nueva York: Columbia University Press.
- y Perrow, C. (1977), «Insurgency of the Powerless», *American Sociological Review*, 42: 249-268.
- Jennings, E. T. (1979), «Urban Riots and Welfare Policy Change», en H. Ingram y D. Mann (comps.), *Why Policies Succeed or Fail*, Beverly Hills, Ca.: Sage.
- Judkins (1979), «The Black Lung Movement», en *Res. Social Movement Conflict Change*, 2: 78-96.
- Kotz, N. y Kotz, M. (1977), *A Passion for Equality*, Nueva York: Norton.
- Korpi, W. (1974), «Conflict, Power and Relative Deprivation», *American Political Science Review*, 68: 971-984.
- Ladd, E. C. y Hadley, C. D. (1978), *Transformations of the American Party System*, Nueva York: Norton.
- Lang, K. y Lang, G. (1961), *Collective Dynamics*, Nueva York: Crowell.
- Leahy, P. y Mazur, A. (1978), «A Comparison of Movements Opposed to Nuclear Power, Floridation and Abortion», *Res. Social Movements Conflict Change*, 1: 121-139.
- Liebman, R. (1983), «Mobilizing the Moral Majority», en R. C. Liebman y R. Wuthrow (comps.) *The New Christin a Right*, Hawthorne, NY: Aldine.
- Lincoln, J. R. (1978), «Community Structure and Industrial Conflict», *American Sociological Review*, 43: 199-220.
- Lipset, S. M. (1971), *Rebellion in the University*, Chicago: University of Chicago Press.
- Lodhi, A. Q. y Tilly, C. (1973), «Urbanization, Crime and Collective Violence in the 19th Century France», *American Journal of Sociology*, 79: 296-318.
- Lofland, J. (1977), *Doomsday Cult*, Nueva York: Irvington, 2.ª ed.
- (1979), «White-hot Mobilization», en M. N. Zald y J. M. McCarthy (comps.), *The Dynamics of Social Movements*, Cambridge, Ma.: Winthrop, pp. 157-166.
- Lukes, S. (1974), *Power*, Nueva York: Macmillan.
- Marwell, G. (1981), «Altruism and the Problem of Collective Action», en V. Derlega y J. Grzelack (comps.), *Cooperation and Helping Behavior*, Nueva York: Academic, pp. 13-37.

- y Ames, R. (1979), «Experiments in the Provision of Public Goods I», *American Journal of Sociology*, 84: 1335-1336.
- y — (1980), «Experiments in the Provision of Public Goods II», *American Journal of Sociology*, 85: 926-937.
- McAdam, D. (1982), *Political Process and the Development of Black Insurgency*, Chicago: University of Chicago Press.
- McCarthy, J. y Zald, M. N. (1973), *The Trends of Social Movements*, Morristown, NJ: General Learning.
- y — (1977), «Resource Mobilization and Social Movements», *American Journal of Sociology*, 82: 1212-1241.
- McFarland, A. A. (1976), *Public Interest Lobbies*, Washington DC: American Enterprise Institute.
- Meier, A. y Rudwick, E. (1973), *CORE*, Nueva York: Oxford University Press.
- Milbrath, L. y Goel, M. L. (1977), *Political Participation*, Chicago: Rand McNally.
- Miller, W. E.; Miller, A. H. y Schneider, E. J. (1980), *American National Elections Studies Sourcebook, 1952-1978*, Cambridge, Ma.: Harvard University Press.
- Moe, T. M. (1980), *The Organization of Interests*, Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Molotch, H. (1979), «Media and Movements», en M. N. Zald y J. M. McCarthy (comps.), *Dynamics of Social Movements*, Cambridge, Ma.: Winthrop, pp. 71-93.
- Moore, B. (1978), *Injustice*, White Plains, NY: Sharpe.
- Morris, A. (1980), «The Origins of the Civil Rights Movements», tesis doctoral, Stony Brook: State University of New York.
- (1981), «Black Southern Students Sit-in Movement», *American Sociological Review*, 46: 744-767.
- Nelkin, D. y Pollak, N. (1981), *The Atom Besieged*, Cambridge, Ma.: MIT Press.
- Nie, N. H.; Verba, S., y Petrocik, J. R. (1980), *The Changing American Voter*, Cambridge, Ma.: Harvard University Press.
- Nielsen, F. (1980), «The Flemish Movement in Belgium after World War II», *American Sociological Review*, 45: 76-94.
- Oberschall, A. (1973), *Social Conflict and Social Movement*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- (1978a), «Theories of Social Conflict», *Annual Review of Sociology*, 4: 291-315.
- (1978b), «The Decline of the 1960s Social Movements», *Res. Social Movements Conflict Change*, 1: 257-289.
- Oliver, P. (1982), «The Mobilization of Paid and Volunteer Activists in the Neighborhood Movement», presentado en el *Annual Meeting of the American Sociological Association*, 76, Toronto (Canada).

- (1982), «The Decline of the 1960s Social Movements», *Res. Social Movements Conflict Change*, 1: 257-289.
- Olson, M. (1968), *The Logic of Collective Action*, Nueva York: Schocken. [La lógica de la acción colectiva, México: Limusa, 1992].
- Orum, A. (1972), *Black Students in Protest*, Washington, DC: American Sociological Association.
- Paige, J. (1975), *Agrarian Revolution*, Nueva York: Free Press.
- Perrow, C. (1979), «The Sixties Observed», en M. N. Zald y J. M. McCarthy (comps.), *The Dynamics of Social Movements*, Cambridge, Ma.: Winthrop, pp. 192-211.
- Peterson, P. y Greenstone, J. D. (1977), «Radical Change and Citizen Participation», en R. H. Haveman (comp.), *A Decade of Federal Antipoverty Programs*, Nueva York: Academic, pp. 241-278.
- Pinard, M. (1971), *The Rise of a Third Party*, Englewood Cliffs, NY: Prentice-Hall.
- Piven, F. y Cloward, R. (1977), *Poor People's Movements*, Nueva York: Pantheon.
- Ragin, C. C. (1979), «Ethnic Political Mobilization», *American Sociological Review*, 44: 619-634.
- , Coverman, S. y Hayward, M. (1982), «Major Labor Disputes in Britain, 1902-1938», *American Sociological Review*, 47: 238-252.
- Rogers, M. (1974), «Instrumental and Infra-resources», *American Journal of Sociology*, 79: 1418-1433.
- Rosenau, J. (1974), *Citizenship between Elections*, Nueva York: Free Press.
- Rothschild-Whitt, J. (1979), «Conditions for Democracy». Véase Case y Taylor (1979), pp. 215-244.
- Salisbury, R. H. (1969), «An Exchange Theory of Interest Groups», *Mid. Journal of Political Science*, 13: 1-32.
- Samuelson, P. A. (1954), «The Pure Theory of Public Expenditure», *Rev. Econ. Stat.*, 36: 387-390.
- Schattschneider, E. E. (1960), *The Semi-Sovereign People*, Nueva York: Holt, Reinhardt and Winston.
- Schmitter, P. (1979), «Models of Interest Intermediation and Models of Societal Change in Western Europe», en P. Schmitter y G. Lehmbruck (comps.), *Trends Towards Corporatist Intermediation*, Beverly Hills, Ca.: Sage, pp. 119-146 [Neocorporativismo I: más allá del Estado y del mercado, México: Alianza, 1992].
- Schofield, A. C.; Meier, R. J. y Griffin, R. J. (1979), «Constructing a Social Problem», *Social Problems*, 27: 38-62.
- Schumaker, P. D. (1978), «The Scope of Political Conflict and the Effectiveness of Constraints in Contemporary Urban Protest», *Sociological Q.*, 19: 168-184.

- Schwartz, M. (1976), *Radical Protest and Social Structure*, Nueva York: Academic.
- Skocpol, T. (1979), *States and Social Revolutions*, Nueva York: Cambridge University Press [*Estados y revoluciones sociales*, México: FCE, 1984].
- Shorter, N. y Tilly, C. (1974), *Strikes in France*, Nueva York: Cambridge University Press [*Las huelgas en Francia*, Madrid: Ministerio de Trabajo, 1985].
- Simcock, B. L. (1979), «Development Aspects of Antipollution Protest in Japan», *Res. Social Movements Conflict Change*, 2: 83-104.
- Snow, D. A.; Zurcher, L. A. y Eklund-Olson, S. (1980), «Social Networks and Social Movements», *American Sociological Review*, 45: 787-801.
- Snyder, D. y Kelly, W. R. (1976), «Industrial Violence in Italy, 1878-1903», *American Sociological Review*, 82: 131-162.
- Starr, P. (1979), «The Phantom Community». Véase Case y Taylor (1979), pp. 245-273.
- Steady, H. R. y Foley, J. W. (1979), «The Success of Protest Groups», *Social Science Research*, 8: 1-15.
- Tarrow, S. (1982), «Social Movements, Resource Mobilization and Reform During Cycles of Protest», West. Studies Prog. Project Social Protest and Policy Innovation, *Working Paper*, núm. 1, Ithaca, NY: Cornell University.
- Taylor, C. L. y Jodice, D. A. (1983), *World Handbook of Political and Social Indicators III*, New Haven, Ct.: Yale University Press.
- Tierney, K. J. (1982), «The Battered Women Movement and the Creation of the Wife Beating Problem», *Social Problems*, 29: 207-220.
- Tillock, H. y Morrison, D. E. (1979), «Group Size and Contributions to Collective Action», *Res. Social Movements Conflict Change*, 2: 131-158.
- Tilly, C. (1978), *From Mobilization to Revolution*, Reading, Ma.: Addison-Wesley.
- (1979), «Social Movements and National Politics», *Working Paper*, núm. 197, CRSO, Ann Arbor, Mi.: University of Michigan.
- ; Tilly, L. y Tilly, R. (1975), *The Rebellious Century*, Cambridge, Ma.: Harvard University Press.
- y Tilly, R. (1981), *Collective Action and Class Conflict*, Beverly Hills, Ca.: Sage.
- Turner, R. (1982), «Collective Behavior and Resource Mobilization as Approaches to Social Movements», *Res. Social Movements Conflict Change*, 4:1-24.
- y Killian, L. (1972), *Collective Behavior*, Englewoods Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

- Useem, M. (1975), *Protest Movements in America*, Indianápolis, In.: Bobbs-Merrill.
- Useem, B. (1980), «Solidarity Models, Breakdown Model and the Boston Anti-busing Movement», *American Sociological Review*, 45: 357-369.
- Von Eschen, D.; Kirk, J. y Pinard, M. (1971), «The Organizational Substructure of Disorderly Politics», *Social Forces*, 49: 529-544.
- Walsh, E. J. (1981), «Resource Mobilization and Citizen Protest in Communities Around Three Mile Island», *Social Problems*, 26: 1-21.
- Weisbrod, V.; Handler, J., y Komesar, N. K. (1978), *Public Interest Law*, Berkley, Ca.: University of California Press.
- West, G. (1981), *The National Welfare Rights Movement*, Nueva York: Praeger.
- Wilkinson, P. (1971), *Social Movements*, Londres: Pall Mall.
- Wilson, J. Q. (1973), *Political Organizations*, Nueva York: Basic.
- Wilson, W. J. (1973), *Power, Racism and Privilege*, Nueva York: Free Press.
- Wood, J. (1974), *The Sources of American Student Activism*, Lexington, Ma.: Heath.
- Wood, P. (1982), «The Environmental Movement», en J. L. Wood y M. Jackson (comps.), *Social Movements*, Belmont, Ca.: Wadsworth, pp. 201-220.
- Wrong, D. (1979), *Power*, Nueva York: Harper and Row.
- Yankelovich, D. (1974), *The New Morality*, Nueva York: McGraw-Hill.
- (1981), *New Rules*, Nueva York: Random House.
- Zald, M. N. y Ash, R. (1966), «Social Movement Organizations», *Social Forces*, 44: 327-341.
- y McCarthy, J. (1980), «Social Movement Industries», *Res. Social Movement Conflict Change*, 3: 1-20.
- Zurcher, L. A. y Snow, D. A. (1981), «Collective Behavior Social Movements», en M. Rosenberg y R. Turner (comps.), *Social Psychology*, Nueva York: Basic, pp. 447-482.